

fección sin cortapisas a la hora de alimentar el paro, mirando exclusivamente a los intereses de una parte.

Como contrapartida de ello, los empresarios piden que se dote un Seguro de Desempleo "suficiente y eficaz" que atienda a las necesidades de los trabajadores víctimas de la flexibilización. Pero, ¿cómo se va a dotar financieramente ese seguro si, al tiempo, los empresarios piden que se establezca una moratoria en los pagos fiscales y de la Seguridad Social? ¿De dónde va a salir el dinero para pagar a los parados si los empresarios no quieren hacer su contribución?

En esto de la moratoria habría que hacer otra reflexión: es cierto, y hay numerosos ejemplos de ello, que para muchas empresas en difíciles condiciones de tesorería a veces es duro pagar a la Seguridad Social y hacer frente a los impuestos. Hay empresas que han tenido que cerrar por no poder hacer frente a esas cargas. Pero no es menos cierto que las empresas que se encuentran en tales situaciones suelen ser entidades pequeñas o medianas y nunca las grandes empresas, suficientemente apoyadas por la Banca y cuya supervivencia no está en juego. Lo que, en definitiva, ocurre es que —y no creemos que así vaya a pasar— si la moratoria fuera aprobada por el Gobierno, los grandes beneficiarios de la misma no serían esas pequeñas y medianas empresas hoy en graves dificultades, sino las grandes empresas.

Si a esta reducción de gastos —y la moratoria es, de hecho, una reducción, pues no es lo mismo pagar en pesetas de agosto de 1977 que hacerlo en las de febrero de 1978, tal y como va la inflación— se une la "moderación salarial" que esos empresarios piden, comprobaremos que lo que la CEOE ha propuesto al Gobierno es una de las operaciones más redondas que imaginar quepa.

De todo ello se deduce, y así se han encargado de confirmarlo las distintas centrales, que en estas condiciones el acuerdo con los sindicatos no es posible. Que si ya había problemas con las propuestas del Gobierno —y precisamente porque los sindicatos acusan a éste de defender los intereses de una parte—, la patronal, los empresarios, con unas pretensiones desorbitadas, se han encargado de enriquecer aún más el panorama.

Cuestión más compleja es la propuesta de "establecer un nuevo marco de relaciones laborales en el seno de la empresa". En primer lugar, porque la CEOE no define su posición ante las características que habría de tener este nuevo marco. En segundo, porque se desconoce el interés que los empresarios de la CEOE depositan en este tema en el marco de la negociación y conocer este interés es importante, habida cuenta de la importancia que le han dado las centrales sindicales en el primer embite habido con el Gobierno.

Si colocáramos la petición en un nuevo marco laboral en relación con otro de los puntos citados por la CEOE, la necesidad de un aumento de la productividad, tal vez se aclararían las intenciones empresariales al respecto: porque sabido es que un cierto sector empresarial, perfectamente identificado con la CEOE, ha venido explicando las reducciones de la productividad que sin pausa han venido dándose en los últimos años, gracias a la conflictividad laboral, al absentismo, es decir, a la actitud de los trabajadores frente a la empresa y a sus tareas.

Otros puntos de vista, insisten, apoyándose en las más elementales consideraciones económicas, que la reducción de la productividad es directa consecuencia del descenso de la inversión que empieza a tener lugar desde 1974. Y reducir inversiones es una decisión empresarial, por los motivos que sea, en la que nada tienen que ver los trabajadores. En esta línea, el "plantear el carácter fundamental de la recuperación de los niveles de productividad" que se cita en el comunicado de la CEOE, únicamente podría ser entendido como un llamamiento al conjunto de la patronal y nunca como una petición al Gobierno. Ahora bien, si lo que se pretende es echar la culpa a los trabajadores, la cosa ya tendría otro sentido.

El mismo día en que el secretario de Estado para la Economía, Alvarez Rendueles, y los directivos de distintos Ministerios recibían a la CEOE, representantes de las pequeñas y medianas empresas se entrevistaban con Fernández Ordóñez, ministro de Hacienda. Le plantearon la necesidad que un millón de pequeñas y medianas empresas tienen de apoyos crediticios y fiscales. Coincidiendo también con estas reuniones, la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Zaragoza acusaba en un comunicado al comportamiento de la Banca como causante de muchos problemas en sus empresas.

Los Bancos no conceden créditos. Los problemas de tesorería se multiplican, especialmente en las empresas de pequeñas y medianas dimensiones. Los banqueros dicen que ellos no tienen la culpa: que el Banco de España ha reducido el gota a gota, es decir, el crédito a corto plazo que concede a la Banca para apoyar a su liquidez. Pero otras fuentes indican que si bien es cierto que a la chita callando el Banco de España está realizando una política de "clere" de liquidez, la Banca, con actuaciones por su cuenta, está agravando las tensiones crediticias, con fines desconocidos.

Y las víctimas de estas actuaciones son las pequeñas y medianas empresas: lo que aquí cabe preguntarse es en qué medida sus problemas, agravadísimos en las últimas semanas, han estado representados en la mesa de negociaciones con el Gobierno. ■

PIERRE COT

UN AMIGO DE LA REPUBLICA ESPAÑOLA

PIERRE Cot ha muerto a los ochenta y un años en Francia, donde fue ministro; había sido uno de los grandes valedores de la República española en la guerra civil. En ese momento, Pierre Cot era ministro del Aire del Gobierno del Frente Popular, y respondió favorablemente a la petición de aviones hecha por el Gobierno español. Jules Moch, que era entonces secretario general de la Presidencia del Gobierno, ha contado así una de las intervenciones de Pierre Cot a favor de España: "Recuerdo una reunión en el domicilio de Leon Blum, en el 'quai' de Bourbon, en la noche del 24 al 25 de julio de 1936, a la cual



asistíamos Pierre Cot, Daladier y yo, para examinar las peticiones españolas que aportaba Los Ríos (Fernando de los Ríos), ex ministro socialista y nuevo embajador de España. El debate sobre esas entregas (de armas) continuó en el Consejo de Ministros de 1 de agosto de 1936. La división entre partidarios y adversarios de una ayuda que tendría ya que ser necesariamente clandestina, en razón de las protestas del Eje, y más aún por la actitud dudosa de Inglaterra, no se hacía según los límites de los partidos. Por parte de los radicales, Pierre Cot y Jean Zay tomaban posición a fondo en favor de la entrega, mientras que Chautemps, Daladier y Bastid opinaban en sentido contrario. El Consejo de Gabinete del 7 de agosto me ha dejado un recuerdo muy vivo. Se discutía una vez más acerca del pacto de no intervención en España, que entonces se estaba discutiendo

entre las Cancillerías. No quedaban aquel día más que trece aviones 'Dewoitine' en estado de ser enviados a España. El jefe de Gabinete de Pierre Cot me avisó de los envíos sucesivos por Pau. Pierre Cot y otros ministros que compartían nuestro punto de vista iban alargando la discusión. Cuando el treceavo y último avión despegó, advertimos a Leon Blum: ya no teníamos nada disponible para entregar inmediatamente. El Consejo aceptó entonces la propuesta de no intervención, que fue firmada en todas las grandes capitales del 18 de agosto al 25, y entraría en vigor el 8 de septiembre de 1936. Pero los dirigentes de las potencias del Eje la violaron inmediatamente, y el Gobierno español nos aportó la prueba en la Asamblea de la Sociedad de Naciones de Ginebra, y esas violaciones nos permitieron regresar a la no intervención 'relâché', y Pierre Cot reentendió inmediatamente las entregas desde que tuvimos de nuevo material en reserva".

Antes de los hechos citados, Pierre Cot, ayudado siempre por su jefe de Gabinete, Jean Moulin —después héroe de la Resistencia—, por Jules Moch y por Gaston Cusin, alto funcionario de aduanas, había estado enviando aviones de bombardeo "Potez 24", utilizando el tránsito por terceros países y no pilotados por franceses.

Pierre Cot, abogado desde 1922, alumno de los jesuitas y en su origen miembro de las Juventudes Católicas, ingresó en el Partido Radical y militó en su ala izquierda —los "jóvenes turcos"—; fue diputado en 1928, subsecretario de Asuntos Exteriores en 1932, ministro del Aire en 1933-1938, excluido de su partido por izquierdismo en 1956, fundador de la Unión Progresista en 1958, Premio Stalin de la Paz en 1953; votó contra De Gaulle en 1958, se manifestó contra las intervenciones soviéticas en Hungría y en Checoslovaquia, enemigo de la V República y de Pompidou; perdió su escaño en 1968, a los setenta y tres años de edad. Toda su vida luchó por la unión de las fuerzas de la izquierda, sin exclusión de ningún partido, colaborando a veces con los comunistas y otras enfrentándose a ellos, según su conciencia le dictaba. Los republicanos españoles no han olvidado su ayuda y su amistad permanente. ■